



La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal la revelación a un concejal de determinada información que solicita en relación con la tramitación de un expediente por infracción de la normativa urbanística y la ejecución de la correspondiente sanción impuesta, así como la relacionada con los datos tributarios referidos a una persona física y una sociedad mercantil. Se adjunta a la consulta un informe elaborado por la Secretaría General del Pleno en el que se analizan las distintas cuestiones planteadas desde la perspectiva de la aplicación de la mencionada Ley Orgánica y la opinión de esta Agencia al respecto.

Teniendo en cuenta el mencionado informe, debe coincidirse con el mismo en lo referido a la inaplicación de la Ley Orgánica 15/1999 a las personas jurídicas, tal y como reitera el artículo 2.2, inciso primero, de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. De este modo, la opinión de esta Agencia únicamente puede referirse a la información solicitada de la persona física a la que se refiere la consulta, no siendo de aplicación las normas de protección de datos a la empresa mencionada en la misma.

Igualmente, ha de coincidirse en la conclusión alcanzada por el informe remitido en lo que afecta a la información contenida en el expediente urbanístico tramitado por la Corporación consultante, dado que la comunicación de los datos se encontraría amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el artículo 77 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, debiendo tenerse en cuenta en todo caso lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica, en cuya virtud la información a la que se tenga acceso únicamente podrá ser empleada para el ejercicio por el concejal de su función de control.

En cuanto a la cesión de datos de naturaleza tributaria, y con pleno respeto a las opiniones discrepantes, es criterio reiterado de esta Agencia Española de Protección de Datos que sólo será posible la cesión en los supuestos enumerados taxativamente por el artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, entre los que no se encuentra el sometido a informe en el presente caso. En este sentido, no resulta a nuestro juicio posible realizar una

interpretación extensiva de la referencia que la letra e) de dicho precepto realiza de las comisiones parlamentarias, considerando la misma aplicable a supuestos como el amparado.

No debe olvidarse, por una parte, que en este caso nos encontramos ante una norma que, además de regular las obligaciones de las Administraciones Tributarias, implica una revelación de datos de carácter personal, es decir, una limitación de un derecho fundamental, reconocido como tal por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, siendo en consecuencia necesario realizar una interpretación restrictiva de la mencionada norma.

Además, debe igualmente recordarse que el citado artículo 95.1 e) se refiere exclusivamente a las comisiones parlamentarias de investigación y no a cualquier solicitud de información que se realice por los miembros de las cámaras o asambleas legislativas en el mero ejercicio de la función de control del Gobierno prevista en la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Teniendo en cuenta que el supuesto analizado en el presente caso se asimilaría más a este último caso, no sería siquiera posible efectuar la interpretación analógica de lo establecido en el artículo 95.1 e) de la Ley General Tributaria.

Por último, en los supuestos en los que el citado precepto ha pretendido aplicar una determinada habilitación para la cesión de datos a todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de unas determinadas competencias, ha efectuado una referencia genérica a las mismas, sin limitar el alcance de la comunicación a destinatarios que únicamente existen en algunas de ellas, como es el caso analizado. Así sucede en lo que respecta a la cesión de datos a otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias (artículo 95.1 b) o la llevada a cabo para lograr La colaboración con cualesquiera otras Administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea (artículo 95.1 d).

En consecuencia, debe reiterarse el criterio de esta Agencia en el sentido de que la comunicación de datos tributarios a los concejales que lo solicitasen en el ejercicio de su función de control del gobierno municipal no se encuentra amparada por la Ley Orgánica 15/1999.